

y el debate es el modo de zanjar las diferencias políticas. Por otro lado, la aceptación de la voluntad de la mayoría es la consecuencia lógica del proceso anterior. Alterar estos procedimientos, convivir con transgresiones permanentes a estas reglas ponen en peligro la estabilidad institucional y cuestionan la esencia misma de la democracia.

Por todo ello creemos conveniente el pronto esclarecimiento de los hechos de Berazategui y la sanción de los responsables.

Rodolfo Rodil. — Juan P. Cafferata. — Marcela Bordenave.

—A la Comisión de Legislación Penal.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 346 del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 346: Cuando el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estimare completa la instrucción, correrá vista sucesiva a la parte querellante y al agente fiscal por el término de seis (6) días, prorrogable por otro período igual en casos graves o complejos.

Este decreto deberá ser notificado al imputado y a su defensor, a los fines del artículo 431 bis 2.

Art. 2º — Incorpórase el siguiente texto como artículo 347 bis del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984.

Artículo 347 bis: El agente fiscal al formular el requerimiento de elevación a juicio podrá solicitar la aplicación del procedimiento de juicio abreviado, en cuyo caso procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 431 bis 1.

Art. 3º — Modifícase el artículo 349 del Código Procesal Penal, sancionando por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 349: Siempre que el agente fiscal requiera la elevación a juicio, las conclusiones de los dictámenes serán notificadas al defensor del imputado, quien podrá en el término de seis (6) días:

1. Deducir excepciones no interpuestas con anterioridad.
2. Oponerse a la elevación a juicio, instando el sobreseimiento.
3. En el supuesto del artículo 347 bis, prestar la conformidad a que se refiere el artículo 431 bis 2.

Si no se dedujeren excepciones u oposición, la causa será remitida por simple decreto, que declarará clausurada la instrucción, al tribunal que corresponda, en el término de tres (3) días de vencido el plazo anterior, salvo el caso del artículo 431 bis 6.

Art. 4º — Incorpórase como capítulo IV del título II — juicios especiales — del libro III del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el siguiente articulado:

CAPÍTULO IV
Juicio abreviado

Artículo 431 bis:

1. Si el agente fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa de libertad no mayor de seis (6) años, o de una no privativa de libertad aun procedentes en forma conjunta, podrá solicitar, al formular el requerimiento de elevación a juicio, que se tramite la causa conforme al procedimiento de juicio abreviado previsto en este capítulo. En tal caso deberá formular expreso pedido de pena.
2. Para que tal solicitud sea admisible, el agente fiscal deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor respecto de la adopción de la vía procedimental abreviada. Estos también podrán requerirla en la oportunidad del artículo 346 *in fine* y hasta antes de la formulación del requerimiento de elevación a juicio.
3. Salvo el caso del artículo 431 bis 6, el juez elevará el pedido del artículo 431 bis 1 y la conformidad del artículo 431 bis 2, sin otra diligencia, al tribunal de juicio el que, si no rechaza la abreviación del trámite por considerarla inconveniente, correrá vista al imputado y su defensor. Si hubiere querellante, previo a la adopción de cualquiera de estas decisiones, le requerirá su opinión la que no será vinculante.
4. Si el tribunal rechazara el acuerdo de juicio abreviado, se procederá de acuerdo al trámite ordinario, con arreglo al artículo 354.
En tal caso, la conformidad prestada por el imputado no podrá ser tomada como un indicio de culpabilidad en su contra, ni el pedido de pena formulado por el agente fiscal vinculará al ministerio fiscal que actúe en el debate.
5. Si al evacuar la vista del artículo 431 bis 3, el imputado asistido por su defensor admitieren el hecho y su participación según lo descrito en el requerimiento fiscal, el tribunal llamará a autos para sentencia, caso contrario se seguirá el trámite ordinario.
La sentencia deberá dictarse en el término de cinco días, se fundará en las pruebas

recibidas durante la instrucción y en la admisión a que se refiere el párrafo anterior, y no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el agente fiscal. Regirán en lo pertinente las reglas de la sentencia.

6. Si la pena privativa de libertad requerida por el agente fiscal no fuera superior a tres años, el juicio abreviado tramitará ante el juez de instrucción, quien procederá con arreglo a las disposiciones del artículo 431 bis, puntos 3, 4 y 5.

Si éste rechazara la abreviación del trámite, el agente fiscal, el imputado o el defensor podrán solicitar en el término de tres (3) días, opinión del tribunal de juicio respecto de la aplicación del trámite abreviado.

Si éste se expidiera favorablemente, el juez de instrucción deberá proceder de conformidad al artículo 431 bis 3 *in fine* y, en su caso, con el artículo 431 bis 5. En caso contrario, se adoptará el trámite ordinario.

7. Cuando hubiera varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad.
8. Contra la sentencia sólo será admisible el recurso de casación interpuesto por el ministerio fiscal, o por el imputado y su defensor.

En el supuesto previsto en los artículos 431 bis puntos 5 y 6, la sentencia que se dicte sólo será irrecurrible para el imputado y su defensor, por el motivo del artículo 456, inciso 2º.

9. El querellante sólo podrá recurrir de la sentencia absolutoria.
10. La acción civil no será resuelta en el procedimiento por juicio abreviado, aunque se podrá deducir en sede civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de casación en la medida que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior.

Art. 5º — Modifícase el artículo 25 del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 25: Los tribunales en lo criminal juzgarán en única instancia de los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal. Asimismo emitirán su opinión en el supuesto previsto por el artículo 431 bis 6.

Art. 6º — Modifícase el artículo 26 del Código Procesal Penal, sancionado por ley 23.984, el que quedará redactado al siguiente tenor:

Artículo 26: El juez de instrucción investiga los delitos de acción pública de competencia criminal,

excepto en los supuestos en los que el ministerio fiscal ejercite la facultad que le otorga el artículo 196. Asimismo juzgará los delitos por vía de juicio abreviado en el supuesto del artículo 431 bis 6.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José I. Cafferata Nores.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Nadie duda hoy de la necesidad de que el "juicio" del artículo 18 de la Constitución Nacional debe ser oral y público, por su insuperada conjunción de garantías y eficacia. Pero la realidad indica que los erarios oficiales no están en condiciones de tramitar todos los asuntos penales por su intermedio; y también que muchos de éstos pueden tener finales alternativos a la declaración de culpabilidad (verbigracia la ley 24.316), o que para la aplicación de la ley penal, pueda abreviarse el proceso a través de soluciones de consenso.

Esta situación ha llevado a que se opine sobre la necesidad de implementar formas abreviadas de proceso o de juicios —para delitos leves o de mediana importancia— que eviten la realización del trámite oral y público, en todo caso reservándolo a éste para los más necesarios, por su gravedad e importancia, o cuando no exista acuerdo sobre su abreviación.

El acuerdo formal al que se refiere el artículo 431 bis del proyecto es la exteriorización de otro acuerdo: el que el agente fiscal y el defensor hacen sobre la pena a imponer (que generalmente será más leve, como contrapartida de la confesión) y que el tribunal no podrá aumentar. La jurisprudencia argentina admite la confesión como atenuante de la pena ya que la misma resulta un indicio favorable de la personalidad del imputado al ser demostrativa de arrepentimiento (verbigracia Cámara Criminal, Rosario, sala II, 17-4-80, "H. M. F. y otro", en Zeus, tomo 20-166; Cámara Nacional Federal, Sala Criminal y Correccional, 20-10-70, "Rodríguez, Antonio y otro", en "La Ley", 142-522; Cámara Nacional Criminal y Correccional sala V, 31-5-68, "Alonso, Alberto", en "La Ley", 133-477). Ya el proyecto Tejedor incluía explícitamente a la confesión como atenuante de la pena. (Ver Gurruchaga, Hugo: *La ética y la confesión en el procedimiento penal* "La Ley", 1985-D-1.180.)

Esta institución tiene precedentes en el mundo y ha sido ampliamente receptada en los tribunales de Córdoba.

a) Precedentes. En los Estados Unidos el "juicio" propiamente dicho "ha pasado a ocupar un lugar simbólico como método de atribución de responsabilidad penal ... pues, cerca del 90 % de las condenas son impuestas sin realizar el juicio, a través de un proceso de negociación conocido como *plea-bargaining*, y consiste en las concesiones que el fiscal realiza a cambio de obtener la confesión del imputado (Bovino, Alberto: "Simplificación del procedimiento y juicio abreviado", en "Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Procesal", Córdoba, agosto de 1993, página 590, citando

profusamente a autores americanos). El tribunal, dadas ciertas condiciones debe limitarse a actuar como lo pide el fiscal;

b) Aceptación en Córdoba. Desde que entró en vigencia el "juicio abreviado" al 30-6-95, las Cámaras en lo Criminal de la Capital de Córdoba dictaron 223 sentencias, de las cuales 137 lo fueron a través del trámite "normal" (juicio oral y público) y 86 por el trámite abreviado, lo que equivale casi al 40 % del total. Cabe señalar además que la totalidad de las cámaras en lo Criminal han utilizado el juicio abreviado, lo que indica la aceptación unánime de esta innovación por parte de los jueces que suelen ser reacios a estas novedades, salvo que les encuentren una razonable utilidad. Las pocas voces críticas que se escuchan provienen de la teoría y, en su mayoría, procuran acordar más garantías al imputado.

En la práctica, la presentación escrita y conjunta de fiscal, imputado y defensor en la que aquél ratifica la acusación, éstos la aceptan como fundada en hechos verdaderos, y acuerdan el monto de la pena, evita todo el desarrollo del debate oral y público. Los tribunales cordobeses adoptan ésta y otras formas parecidas. También ha permitido una mejor imagen pública sobre la eficiencia de la justicia penal, sin menoscabo alguno de los derechos y garantías del acusado.

El proyecto que presentamos resguarda las garantías del imputado y asegura una adecuada atención de los intereses de la víctima del delito.

José Cafferata Nores.

—A la Comisión de Legislación Penal.